



[English below](#)

Comunicado de la Red Gran Caribe Libre de Fósiles en solidaridad con CIAM y Adopta Bosque en Panamá

Desde la Red Gran Caribe Libre de Fósiles expresamos nuestra profunda preocupación y rechazamos los intentos de silenciamiento que enfrentan las organizaciones panameñas Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), integrante de nuestra red, y Adopta Bosque, a través de demandas judiciales y medidas cautelares que incluyen el embargo temporal de cuentas y bienes.

Estas acciones surgen en el contexto de la oposición ciudadana al proyecto Puerto Barú, en David, Chiriquí, que contempla actividades asociadas al trasiego de combustibles fósiles y que ha sido promovido como parte de una ruta logística hacia el Caribe. El proyecto se ubica en una zona de altísimo valor ecológico que alberga el 25% de los manglares de Panamá, ecosistemas marino-costeros fundamentales para la biodiversidad, la pesca artesanal y la protección frente a eventos climáticos extremos. Esta área fue reconocida como área protegida por el Estado panameño desde 2007 y constituye un espacio clave para la conservación de múltiples especies.

La defensa de los manglares de David y de su función como barrera natural, refugio de vida silvestre y sustento comunitario ha motivado la actuación de las organizaciones hoy afectadas. Las represalias judiciales y financieras se producen precisamente en el marco de ese ejercicio legítimo de protección ambiental.

El uso de medidas cautelares económicas contra organizaciones ambientales genera un efecto intimidatorio que amenaza su funcionamiento, afecta a sus equipos de trabajo y pone en riesgo proyectos de conservación, educación e investigación fundamentales para las comunidades y los ecosistemas del país.

Como red regional que impulsa una transición energética justa y el abandono progresivo de los combustibles fósiles en el Gran Caribe, recordamos que la participación ciudadana, el acceso a la justicia y la defensa del ambiente son pilares democráticos y derechos protegidos por la Constitución panameña y por el Acuerdo de Escazú, ratificado por Panamá.

Exhortamos al Estado panameño a garantizar que el sistema judicial no sea instrumentalizado para hostigar a organizaciones que ejercen legítimamente su derecho a la defensa ambiental. Las medidas adoptadas deben evaluarse bajo criterios estrictos de legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.

Nos solidarizamos con CIAM y Adopta Bosque. Es una responsabilidad colectiva sostener y proteger a quienes defienden el ambiente. En tiempos de crisis climática, cuando los ecosistemas costeros y las comunidades enfrentan presiones crecientes, la labor de las organizaciones ambientales resulta más urgente que nunca.



ENGLISH

Statement from the Fossil-Free Wider Caribbean Network in solidarity with CIAM and Adopta Bosque in Panama

The Fossil-Free Wider Caribbean Network expresses its deep concern and rejects the attempts to silence the Panamanian organizations Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), a member of our network, and Adopta Bosque, through lawsuits and precautionary measures that include the temporary seizure of accounts and assets.

These actions arise in the context of citizen opposition to the Puerto Barú project in David, Chiriquí, which involves activities associated with the transport of fossil fuels and has been promoted as part of a logistics route to the Caribbean. The project is located in an area of extremely high ecological value that is home to 25% of Panama's mangroves, marine-coastal ecosystems that are fundamental for biodiversity, artisanal fishing, and protection against extreme weather events. This area has been recognized as a protected area by the Panamanian government since 2007 and is a key space for the conservation of multiple species.

The defense of the David mangroves and their role as a natural barrier, wildlife refuge, and community livelihood has motivated the actions of the organizations now affected. The legal and financial reprisals are taking place precisely in the context of this legitimate exercise of environmental protection.

The use of economic precautionary measures against environmental organizations has an intimidating effect that threatens their operations, affects their work teams, and jeopardizes conservation, education, and research projects that are fundamental to the country's communities and ecosystems.

As a regional network promoting a just energy transition and the phasing out of fossil fuels in the Greater Caribbean, we recall that citizen participation, access to justice, and environmental protection are democratic pillars and rights protected by the Panamanian Constitution and the Escazú Agreement, ratified by Panama.

We urge the Panamanian State to ensure that the judicial system is not used to harass organizations that legitimately exercise their right to environmental defense. The measures adopted must be evaluated under strict criteria of legality, proportionality, and respect for human rights.

We stand in solidarity with CIAM and Adopta Bosque. It is a collective responsibility to support and protect those who defend the environment. In times of climate crisis, when coastal ecosystems and communities face increasing pressures, the work of environmental organizations is more urgent than ever.

ORGANIZACIONES FIRMANTES/ SIGNING ORGANIZATIONS

Red Gran Caribe Libre de Fósiles

Fundación Quantum (Costa Rica)
The Greenheart Movement (Guyana)
Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO) (Honduras)
Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica ANAFEA (Honduras)
Observatorio de Industrias Extractivas (Guatemala)
Coalición del Este (República Dominicana)
Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA (República Dominicana)
Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC (República Dominicana)
Probios (Suriname)
FOSPA-Suriname
Barranquilla+20 (Colombia)
Waterkeepers Bahamas (Bahamas)
Observatorio de Ecología Política de Venezuela